



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010

Yopo Herrera, M.D.

Citation

Yopo Herrera, M. D. (2013, October 2). *Concertación de Partidos por la Democracia: Coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/21849>

Version: Corrected Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/21849>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/21849> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Yopo Herrera, Mladen Daslav

Title: Concertación de partidos por la democracia : coalición política, partidos y sistema electoral en Chile, 1987-2010

Issue Date: 2013-10-02

Conclusiones

La tercera ola de democratización en América Latina de fines de los ochenta, impuso la conjugación de tres objetivos básicos a las fuerzas políticas de la transición: una gobernabilidad necesaria pero no pensada en términos de efectos políticos futuros; una legitimidad política sellada con procesos de una democracia representativa; y la consolidación de estrategias de desarrollo (políticas públicas) que permitirían una cierta eficacia para responder a desafíos y demandas sociales insatisfechas productos del desarrollo desigual del mercado, particularmente la pobreza y marginalidad.

Estos tres objetivos básicos tendieron a convertirse en una de las principales debilidades (y preocupaciones) de los sistemas políticos de la región: su precaria legitimidad a partir de los problemas de eficacia y eficiencia gubernamental para resolver conflictos y problemas que afectan a las personas en su seguridad y desarrollo, y que tienen efectos en la estabilidad política. Estos problemas apuntan en esencia a la calidad de la democracia en medio de diversas crisis económicas y demandas sociales crecientes.

A pesar de que Chile no fue la excepción, hubo una gran diferencia con el resto de los procesos registrados en la región en términos de los sentidos, profundidades y limitaciones de esta ecuación. En Chile, no hay dudas, de que se había materializado durante la dictadura militar una verdadera “revolución conservadora” y refundacional y, por lo mismo, fue más disciplinado tras el cambio de gobierno en seguir estas prescripciones santificada en el llamado “Consenso de Washington”, más aún cuando ya se había hecho las pérdidas (en términos de derechos, patrimonio estatal y cantidad de pobres) durante la dictadura y en el mundo se vivía un clima ideológico en el que predominaba la ausencia de alternativas legitimadas al capitalismo.

Este cambio de paradigma se expresó en un estricto neoliberalismo en lo económico (privatizaciones, mercado fuerte y un Estado subsidiario), que extendía su hegemonía con una tecnocracia ocupando el campo político, y una democracia protegida que se institucionalizaba en el legado de la Constitución de 1980 y se arropaba con la supuesta “virtud” de una gobernabilidad entendida como ausencia de conflicto y respeto al orden establecido (parte de la hegemonía cultural que se proponía).

Completaban el marco de la transición una coyuntura crítica dada por una movilización social creciente y demandante, la rearticulación de los partidos tradicionales, un proceso decreciente de presencia y control del gobierno cívico-militar y la posibilidad de un resultado final impredecible a partir de la existencia de un subescenario que contaban con una contraparte política-militarizada dispuesta a usar el recurso armado como medio para resolver el conflicto político de poder.

En este contexto de serios desafíos y limitaciones para el proceso democratizador (fuertes interpelaciones y demandas al sistema, obstáculos de los *veto players* y corsés institucionales), entonces, se inscribe la exitosa y pacífica transición a la democracia en Chile tras el plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989, y la posterior estabilización y profundización institucional democrática, así como una gestión gubernamental positiva (eficiente y eficaz) que enfrentó los agudos problemas legados y promovió un importante desarrollo del país en su conjunto.

Tal como estos procesos y sus resultados no pueden interpretarse adecuadamente fuera de su contexto, ellos tampoco pueden disociarse de la naturaleza de la clase política y en particular de la creación de la coalición opositora Concertación de Partidos por la Democracia en 1988 y su evolución desde una fuerza opositora antidictadura a una seria (legítima) y efectiva (eficiente y eficaz) coalición de gobierno.

Desestimados los miedos y las posibilidades reales de retroceso democrático, unido a los importantes desarrollos alcanzados y a la invitación a la participación ciudadana hecha desde el gobierno de la presidenta Bachelet, conjugaron una nueva ecuación política que dejaba parcialmente atrás el eje dictadura-democracia para instalar la política en la esfera de la calidad de la democracia como se aprecia con claridad y tempranamente ya en la segunda vuelta de la elección presidencial Lagos-Lavín (1999-2000). Es decir, se acababa el aval de la forma de hacer política anclada en el plebiscito de 1988.

Esta nueva discusión que había empezado durante el gobierno del presidente Frei en la elite político-intelectual concertacionistas entre los liberales y socialdemócratas (“*autofragelantes*” y “*autocomplacientes*”), se trasladó a una incuestionable aspiración colectiva de una mayor participación de los sectores subordinados para transformar el orden urdido en las postrimerías de los años ochenta y que fue celosamente protegido por la inevitabilidad de una forma de organizar a la sociedad que consagra la Constitución de 1980 y la trama conceptual de la gobernabilidad como virtud democrática operacionalizada en los llamados consensos elitistas.

Las nuevas aspiraciones político-sociales se manifestaron con fuerza con las movilizaciones de los estudiantes durante el gobierno de la presidenta Bachelet (2006) y que han continuado con intensidad y amplitud ascendente durante el 2011-2013. Estos acontecimientos, unidos al triunfo del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, en la elección presidencial del 2009-2010, instauraron una suerte de abanico de interpelaciones a la Concertación (extinción, fracaso, travestismo, hipotecas, etc.) que llevaron a muchos analistas a hablar del fin de un ciclo hasta un cambio de época.

Por lo mismo, y compartiendo algunas interpelaciones a las decisiones asumidas desde el plebiscito de 1988 a la fecha, en esta investigación se contextualizaron y refutaron ciertas frustraciones y críticas más estructurales hechas desde la academia y de ex concertacionistas de “*administración del modelo de democracia liberal*”. Primero, a través de los éxitos y reconocimientos alcanzados por la democracia chilena en un amplio sentido, es decir no solo en cuanto a proceso de traspaso del poder y superación del clima de impunidad y de división de los chilenos, sino que también en lo relacionado al desarrollo del país (estatura político-estratégica alcanzada) y a la estabilidad y profundidad democrática lograda a pesar de no haberse cumplido la totalidad del proceso modernizador prometido (continúan presente algunos enclaves autoritarios y grandes desigualdades) en este proceso de *transplacemete* que se ha vivido desde 1990.

Luego se vio que la consolidación democrática y que sobrepasaba la semidemocracia que consagraba la institucionalidad, junto al desarrollo de la estatura política-estratégica del país, habían implicado un cambio en la cultura estratégica de los chilenos, particularmente en el período de la presidenta Bachelet con su invitación a ampliar libertades y derechos con la democracia ciudadana (inclusiva-participativa): se abrieron espacios para cambios estructurales y salir de la lógica de “en la medida de lo posible”.

Esto ha provocado y explica también que, en el último tiempo, se haya producido una cierta confluencia de los procesos políticos y sociales como momentos constitutivos o generadores de nuevas tendencias históricas que implican a toda la sociedad y entran a desplazar íconos, certidumbres, usos y costumbres, modificando el paisaje político y dando lugar a una nueva realidad social que concuerda con la misión de una coalición transformadora de esencia progresista y democrática como lo es la Concertación. Precisamente, en esa fuerza ciudadana está la base del cambio que vive Chile y que como un reencuentro con las aspiraciones de una sociedad genuinamente democrática,

sin corsés, gracia a las políticas y condiciones que se crearon durante los gobiernos de la Concertación, a veces de forma no consciente y no visualizando siempre el sentido estratégico de ella (sus efectos en el largo plazo).

Asumiendo la validez de la constatación anterior, sin embargo, también contraargumento la idea de cambio abrupto al señalar que aún no hay una sustitución de hegemonías más allá de los procesos en marcha a partir de los cambios acontecidos en los indicadores de desarrollo, en las expectativas y demandas, en la escena política con el fortalecimiento y maduración democrática, en la cultura estratégica y los consecuentes efectos interpeladores al sistema que su cambio produce.

Estos procesos y cambios, sin duda y como se manifestó, se inscriben en los retornos de las decisiones virtuosas tomadas por la propia Concertación en el marco de la consolidación democrática. A partir de este éxito básico de una coalición democrática con sentido estratégico, sugiero la instalación de un procesos de cambio (una síntesis dialéctica) donde la Concertación sí necesita de reformulaciones para minimizar y/o desechar interpelaciones negativas y responder a los desafíos pendientes de la democracia chilena, explicados por factores heredados desde la dictadura (hegemonía ideológico-cultural, corsés institucionales y la fortaleza de *veto players*).

Con la consolidación democrática varias vocerías partidarias de la Concertación y la derecha, en distintas ocasiones en estos 20 años, han dado por finalizada la transición en Chile. Sin embargo, la profundidad de la revolución conservadora expresada, aún con el paso del tiempo, en la mantención de clivajes esenciales y el retorno constante a los efectos de los pilares autoritario-neoliberales, se han encargado de refutar las mismas veces esta sentencia. En este sentido y en el marco del path dependence y del “process tracing”, constató más que un cambio abrupto existe un proceso de *transplacemete*, donde la transición se ha ido diluyendo paulatinamente a través de las distintas políticas impulsadas y que van terminando o modificando los pilares autoritario-neoliberales heredados del régimen anterior e imponiendo una nueva fisonomía en la arquitectura social (una síntesis). Lo mismo sucede con los cambios de la hegemonía y las élites que se requieren para un cambio de época (los *veto players* político-económicos del régimen anterior siguen plenamente vigentes en la escena nacional, aunque ya interpelados por la ciudadanía).

Ante esta realidad, y por lo mismo, remarqué en el desarrollo de esta tesis lo vital que fue para esta suerte de primera etapa de la transición y para la continuidad del proceso democratizador, la conformación y desarrollo de la inédita coalición política

llamada Concertación de Partidos por la Democracia en la segunda mitad de los ochenta con su capacidad de liderazgo, aprendizaje, adaptación y/o renovación en un contexto político de fuertes anclajes (determinantes históricas y coyunturales) y los clivajes que acompañan estos procesos, con los respectivos *veto players* y una derecha más legitimada con cerca de un 50 por ciento de apoyo electoral y que se negaba a toda transformación (a excepción de unos cuantos liberales que no hegemonizaban el sector).

Por otra parte, el propio día a día se ha encargado de “echar por tierra” (desestimar) la “repetida” y “deseada” tesis de algunos de que se trata de una coalición que “ya no existe”, concepto que empezó a ser impulsado por la derecha con el desalojo de Allamand y luego por sectores escindidos de la propia Concertación. Lo claro es que sigue viva y lista para la competencia (y para volver a La Moneda), y la razón fundamental de esto es que la Concertación es, ante todo, un pacto político-electoral efectivo que agrupa a las fuerzas políticas del centro y de la izquierda del país. Eso es lo sustancial. Y mientras exista esa alianza operacionalizada en un proyecto común de transformación, habrá Concertación. En rigor, da lo mismo como se llame. Lo relevante es el encuentro político renovado del centro y de la izquierda como realidad de poder, estabilidad y de cambio.

En el planteamiento de la investigación expuse la hipótesis de que la Concertación es una coalición efectiva (exitosa en esencia) por su continuidad en el poder (ratificación de legitimidad) y los resultados obtenidos en el ejercicio de este (eficacia y eficiencia), longevidad que se da a partir de su capacidad de aprendizaje con resultados de adaptación y/o renovación (decisiones virtuosas) sin perder sus anclajes valóricos, programáticos y procedimentales esenciales en un sentido de continuidad democrática ascendente (democracia de calidad).

Relacioné esta variable dependiente (capacidad de aprendizaje con resultados de adaptación y /o renovación), por cierto condicionada por los dos tipos de expresiones que encuentra el “path dependence” en ciencia política (“critical juncture” y “reactive sequence”), a seis variables independientes (incentivos) que la explican y condicionan (limitación-oportunidad) al interactuar en el devenir y contexto político chileno con resultados de retornos crecientes. Estas variables son las de Coalición Política, Sistema de Partidos, Sistema Electoral, Tipo de Régimen Político, Marco Normativo (en particular el Institucionalismo Histórico centrado en las personas y la Cultura Estratégica) y Concentración de Medios.

En el capítulo 1 se desarrolló la discusión teórica de las seis variables independientes. Especial énfasis pusimos en los sentidos que nos da la teoría del path dependence y la relación de estas con la variable dependiente en función del proceso histórico-político en el cual se inserta la Concertación y el proceso de transición (método del “process tracing”), en particular como condicionamiento y modelación de la toma de decisiones.

También relevamos que, a diferencia de otros períodos históricos de alta volatilidad y/o conflicto en la arena política y en el propio Estado (por ejemplo 1973), el aprendizaje hecho por un amplio espectro de partidos de alta representación nacional, particularmente en el ámbito de una revalorización de la democracia y de la necesidad de proyectos mayoritarios, y expresada en una cierta flexibilidad paradigmática hecha en el período autoritario, facilitaron la formación y consolidación de esta coalición política estratégica vital para la transición democrática.

En esta perspectiva, también señalamos en concordancia con algunos autores que en el logro de la estabilidad del sistema político y la gobernabilidad, lo relevante no es el número de partidos en sí mismo sino que la “distancia ideológica” entre ellos (existencia de polarización), más aún cuando algunos son de esencia refundacional en Chile. Las crisis y quiebres en el país, entonces, tienen que ver más con las diferencias existentes entre los partidos sobre cuestiones esenciales y/o intereses de los grupos de poder más que con el sistema de partidos y/o el régimen presidencialista forjado en Chile en la Constitución de 1925. No olvidemos que las guerras civiles del siglo XIX fueron solo entre dos bandos (liberales y conservadores). Del mismo modo, el quiebre de 1973 tuvo como protagonistas casi a las mismas fuerzas que dominan el estable “duopolio binominal” actual y que potencialmente podrían disputarse el poder incluso en el contexto de un nuevo sistema electoral. Por tanto, la fragmentación del sistema de partidos, aunque dificulta la generación de coaliciones y mayorías estables, tiene menos que ver con los niveles de conflicto que puede alcanzar una sociedad. Las tensiones y quiebres tienen un origen distinto al número de partidos o tipo de régimen.

La conformación de esta coalición, de una plataforma programática progresiva y de acuerdos electorales previos en las diferentes arenas políticas, se dan a partir y en el marco de la temprana inauguración de sistema de partidos en Chile, de la experiencia de alianzas pluriclasistas y pluriideológicas y de los aprendizajes tras el golpe de Estado de 1973. Esto ha proyectado (síntesis dialéctica) un tránsito en la historia del sistemas de partidos en Chile desde el bipartidismo al multipartidismo, luego al multipartidismo

extremo con partidos polarizados, para desembocar con el retorno a la democracia en 1990 en un multipartidismo moderado (centrípeto) expresado en una bipolaridad con asomos de un tercer referente, todo ello acompañado de la presencia de varios clivajes históricos y otros propios de la transición.

A parte de los aprendizajes hechos para la generación de mayorías estables en el contexto de estas fracturas sociales, se expuso como uno de los problemas fundamentales de los regímenes presidencialistas las reglas electorales previas y sus efectos, en este caso el sistema electoral binominal. Sin embargo, y a pesar de los enormes déficits democráticos que presenta (distorsiones en la representación y alejamiento ciudadano de los partidos, entre otros), también se constató que, durante el período de transición, éste favoreció la formación y la continuidad de coaliciones estables en Chile y la existencia de un sistema de partidos expresado en una especie de “trialiancismo” con dos ellos que se disputan la hegemonía, lo que terminó favoreciendo la negociación y, por ende, una cierta estabilidad en el período de mayor tensión y debilidad transicional.

También, con el caso de la Concertación, comprobé cómo los presidencialismos no necesariamente conducían a un fracaso o duraban menos en su comparación con el parlamentarismo. En el caso de Chile, esto se explica por los procesos de promoción de mayorías estables (coaliciones), de relegitimación que otorgó la promulgación y ejercicio de segunda vuelta en la elección presidencial, los crecientes “frenos y contrapesos” (*checks and balances*) que impone la división e independencia de los poderes del Estado, la creciente autonomía de organismos públicos y la imposición de una suerte de centripetismo ideológico que se expresó en la política de los acuerdos, entre otros, y que impusieron una suerte de “presidencialismo de compromiso” o “neopresidencialismo” mirado desde otra perspectiva, cuyo eje fundamental en términos de régimen político fue la gobernabilidad a partir de los frutos de la gestión (eficacia-eficiencia) y de la renovación de la adhesión (triumfos electorales- legitimación).

Otro aspecto que asumí en el desarrollo de esta investigación, son los anclajes objetivos y subjetivos como determinantes en la toma de decisiones (“*path dependence*”), expresado en factores de institucionalismo histórico centrado en los actores donde las acciones se dan en espacios estructurados por las relaciones de poder y formas de control institucional por una parte, y en la cultura estratégica por la otra, a partir de elementos culturales, narrativas históricas o “intersubjetivos” que determinan una manera específica de ver las relaciones sociales conflictivas, pero al mismo tiempo

una manera singular de resolver y negociar esas mismas relaciones en vista a un objetivo superior.

Por último, se evidenció con claridad la interrelación de grupos económicos tradicionales y los surgidos durante la dictadura, con los partidos políticos de derecha y los medios de comunicación, y su constitución como triada (*veto players*) que remodelaron la transición y el proceso político que le siguió no siempre de forma positiva al poner muchas veces sus intereses por encima del bien común, lo que ha terminado debilitando la práctica y la gobernanza democrática. Sin embargo, por otro lado, también resalté que esta realidad de *veto players* fue otro factor que fortaleció la cooperación de las propias fuerzas de la Concertación y de la izquierda que propiciaban el cambio para hacer frente a este “*Goliat*” (poder), a la vez de imponer una cierta prudencia y/o reducción de las demandas por parte de la ciudadanía para no entorpecer los avances democráticos provenientes de la negociación.

En el capítulo 2, “El sistema político chileno en el siglo XX: los clivajes como trazadores partidarios y coalicionales”, se analizaron las disyuntivas (en el marco del institucionalismo histórico, entre otros) que implicaron las distintas reformas constitucionales, las evoluciones que se produjeron en el régimen político, en el sistema de partidos y en la sociedad, y la síntesis que representa la ruptura expresada en el golpe de Estado de 1973 y el régimen militar que se inaugura con el nuevo profesionalismo en el contexto del clivaje original y de algunos secundarios como el de Estado-Iglesia.

En su desarrollo se precisó que la temprana aparición en Chile de la clase obrera y de los partidos populares que la representaron, además de romper el duopolio liberal-conservador en la política chilena, explicitaron las principales fracturas que han acompañado la historia política nacional y que se representan en las disputas y conflictos entre propietarios y mano de obra, entre oligarcas y burgueses e Iglesia y Estado.

Se demuestra también que la disputa por el poder, y que da paso a un multipartidismo que incluye propuestas populistas y caudillistas, encuentra en la historia nacional soluciones violentas (intervenciones militares) y/o negociadas dependiendo de la profundidad de su anclaje con las fracturas prevalecientes en el escenario político. Estas nuevas apariciones políticas y las diferencias que generan con las élites dominantes, sin embargo, no concluyen en una ruptura final y/o refundación al no existir una correlación de fuerza que implique cambio de hegemonía. Por otra parte, entre las verdaderas élites nacionales, aquellas donde las diferencias ideológicas no son tan marcadas, siempre hay

lazos (de amistad, familiares, etc.) y caminos de diálogo como se aprecia a lo largo de la historia y también en el proceso de transición (*transplacement*) que vive Chile desde fines de los años 1980s.

Por otra parte, también se señaló que desde que entró en vigencia la Constitución de 1925 (principal marco regulatorio del siglo XX) se impuso un régimen presidencial tras tres décadas de un pseudo parlamentarismo y que aún perdura con algunos matices y limitaciones. Junto a ello, se verificó que se afianzaba la tendencia histórica (también reflejada en la Concertación) de construir alianzas de partidos de distinto pensamiento en vistas a conquistar el poder u oponerse a una ideología globalizadora como el fascismo en su momento o el neoliberalismo extremos propuesto por el régimen saliente. Se diseñó un nuevo estilo de hacer política, distinto a la práctica histórica basada en el “compromiso” y la formación de coaliciones en vista a los procesos electorales, tal como lo hizo la Concertación inicialmente para hacer frente al plebiscito de 1988.

Se demostró también que durante el período en que domina un sistema presidencial multipartidista en Chile, la democracia tuvo progresos importantes (más participación de género y de sectores de clase media y popular), pero también mostró límites importantes al ideologizarse en extremo el sistema de partidos con el alineamiento con Estados Unidos durante la Guerra Fría (polarización) y donde a nivel interno se expresó, por ejemplo, en una persecución a parte de los partidos políticos, organizaciones sociales y la población con la Ley N° 8.987 de “Defensa de la Democracia” de 1948.

Constatamos cómo entre la “*Revolución en Libertad*” del presidente Frei Montalva y el “*Socialismo de Empanadas y Vino Tinto*” del presidente Allende, se instala un sistema de partidos de extrema polarización sin mediatizaciones del centro (la DC se mueve a la derecha, los liberales ya pesan muy poco y los radicales a la izquierda) y/o alternativas legitimadoras de la disputa de representación (no había segunda vuelta presidencial por ejemplo). Este contexto de radicalización condujo a un juego de suma cero entre el Ejecutivo y la oposición “atrincherada” generalmente en el Parlamento durante la experiencia política más compleja de la historia de Chile y latinoamericana: Allende era el primer Presidente socialista en llegar al Ejecutivo mediante el voto, con un programa eminentemente revolucionario en medio de la Guerra Fría, pero sin disponer de mayoría en el Congreso para hacer coherente el deseo con la práctica.

El resultado final de este juego de suma cero entre el gobierno y la oposición en un escenario político nacional de expresión cabal de los principales clivajes; de la búsqueda de una solución autoritaria por parte de los partidos de derecha y de los sectores

empresariales y tecnocráticos; del pretorianismo de las masas (agudos conflictos por extender las bases de la participación y por redefinir los fundamentos de legitimación); una conspiración que trascendía lo nacional con la explícita intervención de Estados Unidos; de un pensamiento militarista de la cupula militar (reserva moral) y de una barrera (objetiva y subjetiva) que dividía a la ciudadanía de sus FF.AA., entre otros, fue el golpe de Estado de 1973 (la expansión del rol militar de Huntington).

A diferencia de los golpes caudillezcos en la región de las décadas anteriores, argumentamos que las FF.AA. chilenas no se tomaron el poder para mantener en él a un dictador (más allá de las aspiraciones del propio Pinochet) sino para resolver el clivaje principal de la lucha de clases con la reorganización del Estado-Nación de acuerdo con la ideología de la “Seguridad Nacional”. El régimen militar que asume en 1973, entonces, se propuso refundar el país a través de lo que se llamó un nuevo profesionalismo y Chile fue uno de los pocos laboratorios donde se aplicó el recetario autoritario-neoliberal con éxito (en profundidad), realidad que durante la transición termina obstaculizando en términos de profundidad y ritmo los cambios democráticos posteriores. Un dato significativo de esto, como lo recalqué, fue la intervención militar en todos los poderes del Estado, siendo el Judicial el único no disuelto por afinidad ideológica y propósito legitimador.

También se señaló en este capítulo, que Pinochet gobernó hasta 1980 sin especificar cuánto tiempo estaría en el poder en función del proyecto refundacional y su propia ambición. Ese año, sin embargo, hizo aprobar una nueva Constitución para mantener una correspondencia bastante estricta entre las prácticas y los textos legales (eje propio del institucionalismo que contempla tempranamente nuestra cultura estratégica), realidad que le sirvió para establecerse y lograr un grado de estabilidad que lo “blindaba” parcialmente de la presión internacional y de los argumentos de la oposición y de algunos partidarios, pero que al final terminaría sentando el camino de la transición en Chile.

Demostramos que durante la dictadura, aunque la mayoría de los principales cargos en el gobierno estuvieron inicialmente en manos de los militares, el poder se ejerció con la estrecha y vital colaboración (una suerte de supervigilancia) de políticos tradicionales de la derecha que sirvieron como funcionarios y de nuevas caras provenientes de una derecha tecnocrática, sin partido y más académica y que jugaría un rol esencial en la transición (impulsándola y como contraparte). Los empresarios tampoco disimularon su apoyo a este proceso al defender éste en esencia su patrimonio y privilegios. El gobierno

de Pinochet, entonces, fue claramente una experiencia-coalición cívico-militar de derecha.

El modelo económico, en particular en su fase privatizadora y de un Estado subsidiario, como se percibe a lo largo del texto, se convirtió en una estrategia que sobrepasaba este ámbito para constituirse en una forma de construcción institucional y regulatoria de las relaciones sociales y políticas, en particular del sentido de propiedad y acumulación que da cuenta el clivaje de clases (ahí están las leyes laborales y las Asociaciones de Fondos de Pensiones - AFP, por ejemplo).

A pesar de lo desnaturalizado que fue la implantación de este nuevo modelo para las propias FF.AA. por su fuerte relación con el concepto de desarrollo y sentido del Estado y de lo nacional, en general la dictadura controló bien las divergencias internas. Sin embargo, también como lo demostramos un hito significativo en el debilitamiento del régimen militar fue la severa crisis económica que estalló en 1982 y que persistió con fuerza hasta 1985. Este suceso aleatorio y el consecuente debilitamiento que generó en el régimen, favoreció una cierta crítica y dejó vacíos de poder (dio espacios) que permitieron el nacimiento del germen de la Concertación, la Alianza Democrática en 1983, un acuerdo nacional amplio destinado a generar las bases para una transición pacífica a la democracia a través de la consagración de una Asamblea Constituyente.

Como también se expresó, el régimen de Pinochet puso en marcha un plan político para sacar a la dictadura del arrinconamiento de que estaba siendo objeto con una efervescencia social creciente e incontrolable y una cada vez más sostenida presión internacional. El objetivo principal de este plan era aislar al “marxismo” a través de un acuerdo con la DC que excluyera cualquier participación de los socialistas, y menos de los comunistas, y avanzar hacia una democratización regulada que permitiese neutralizar la protesta social. Este intento por reconstruir la misma oposición que atentó en contra del gobierno del presidente Allende fracasa a partir de la masividad de las protestas, por el liderazgo progresista de Gabriel Valdés en la DC y la consolidación de los lazos afectivos e intelectuales de los dirigentes opositores en los diferentes frentes. Ante ello, el régimen autoritario debe recurrir a un nuevo estado de excepción, lo que, además de polarizar más el escenario político, demostró su nula intencionalidad de volver a la democracia tal como se entiende en la mayoría del mundo.

Esto proceso y su fracaso nos permitió observar las dificultades de la negociación por las que atravesaba el escenario principal (diálogo régimen-Alianza Democrática), al estar

tironeado (subescenarios) por la izquierda por el Movimiento Democrático Popular y la movilización social y por la derecha por la UDI y Pinochet.

Se señaló como uno de los hitos fundamentales en la consolidación de la Concertación en una coalición política, el almuerzo de homenaje que recibe Gabriel Valdés en el Círculo Español, pero cuyo verdadero objetivo era anunciar el histórico acuerdo político alcanzado entre los demócratas cristianos, los socialistas, los radicales, los socialdemócratas y los republicanos (el vital acuerdo centro-izquierda), que apuntaba a una alianza amplia de partidos que ofreciera al país una salida democrática estable a partir del Manifiesto Democrático.

Chile, en este período y como se esbozó, enfrentaba una coyuntura crítica caracterizada por el desgaste y la deslegitimación del régimen militar, una situación socio-económica mala, la erupción en la escena política de un movimiento popular en alza, la rearticulación de los partidos, una oposición más unitaria con la renovación ideológica de parte del socialismo (rompe con el proyecto de la UP y de alianza de clase) y una Democracia Cristiana menos mesiánica y en franca oposición al régimen militar, la presencia de organizaciones armadas de izquierda y un gran aislamiento político internacional en medio de tensiones fronterizas, factores que terminaron generando condiciones propicias para la transición ante la posibilidad de empeoramiento del conflicto interno en medio de un contexto mundial que tendía al encuentro y diálogo con la tercera oleada democratizadora.

En el capítulo 3, “Los aprendizajes en el marco del plebiscito y la transición”, hacemos particular referencia a la virtud de los aprendizajes y decisiones que hicieron los partidos de oposición de ese momento en los ámbitos ideológicos, coalicional y políticos (institucionalismo histórico basado en los actores) en el contexto crítico que se vivía; al proceso de transición y los condicionamientos institucionales y culturales de su devenir; al virtual empate en términos de representación política que implicó el plebiscito de 1988; y los retornos crecientes en términos democráticos, societales y coalicionales que implicaron las políticas impulsadas por los gobiernos de los presidentes Aylwin y Frei.

Ante la intransigencia del régimen de abrir espacios de participación, señalamos que uno de los escenarios que se planteó como posible fue una salida violenta tipo guerra civil (“*centroamericanización*”) y con un resultado incierto pero desastrosos. Este tipo de experiencias, aunque no usuales, no han estado ausentes en el desarrollo histórico de Chile. En este sentido, argumentamos que ante la posibilidad de agudización del escenario interno, junto al hecho de percatarse la oposición de que mientras existiese

cohesión entre las FF.AA. y sin una avasalladora presión social no habría cambio, todo ello en medio de una cultura estratégica fundamentalmente respetuosa de los procesos institucionales, fortaleció la decisión de la Concertación de ajustarse a los formatos y plazos abiertos por la Constitución de 1980 (plebiscito) a pesar del rechazo de fondo de este instrumento.

Señalamos también, por otra parte, que la dinámica del escenario político de ese momento conspiraba para consagrar la hipótesis central que manejaba el régimen (la continuidad del dictador) por diversas razones. Entre estas, se mencionaron la maduración política opositora, las limitaciones del modelo, la posibilidad de actuar en el marco de la tradición democrático-legalista que llevó al propio régimen y a la derecha a prepararse para el evento plebiscitario, la autonomía mostrada por algunos órganos del Estado (el Tribunal Constitucional por ejemplo), las declaraciones normativa-morales de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica (importante *veto player* desde la independencia), el aumento de la presión internacional en el marco de la democratización que recorría la región (“*the only game in town*”) y del fin de la Guerra Fría con el fin de todos los socialismos reales, deja sin argumentos a la doctrina de “Seguridad Nacional” y su defensa del comunismo.

Estos nos llevó a pronosticar que, puestos en la disyuntiva política bipolar entre la continuidad de Pinochet con la segura agudización del escenario interno y la posibilidad de sacar al dictador a través de una fórmula pacífica-electoral contemplada en la Constitución de 1980 y ya creado el PPD como partido instrumental para enfrentar este evento, tras arduas negociaciones y creación de lazos de confianzas durante mucho tiempo, 17 partidos opositores dan nacimiento a la Concertación de Partidos por el NO para embarcarse en una salida institucional a la dictadura.

Constituida ya la Concertación apuntamos, primero que nada, a que desde sus inicios la Concertación configuró su liderazgo sobre un conjunto de convicciones programáticas muy profundas compartidas así como apelando (usando) a mecanismos y arreglos institucionales diseñados a través del tiempo y compartidos por todos.

Enseguida argumenté que el nacimiento de esta coalición se da a partir de una condición de evolución constante de la oposición y en un sentido integral (práctico, emocional, conceptual e institucional). Así, se empieza, entre otros, con el “*Grupo de los 24*” y se sigue con la “*Alianza Democrática*”, la “*Asamblea de la Civilidad*” y luego la “*Concertación*”. Esto marca una fuerte evolución de la cultura estratégica de la sociedad y de los partidos y la voluntad de los mismos por compartir un camino en común con un

fin superior. Ello me llevó a afirmar que el gradualismo fue, entonces, un rasgo fundamental y básico que recorre la historia de la Concertación.

También expusimos que desde la segunda mitad de los ochentas y durante la transición, la Concertación fue un actor fundamental para que Chile relativizara los principales clivajes a través de las autocríticas (aprendizajes) de los partidos democráticos y sus dirigencias. En particular, revelé que tras el golpe de Estado de 1973 y con el posterior fin de los socialismos reales, se produce una revalorización de parte de actores claves del sentido y valor de la democracia, así como la consciencia de su fragilidad. Esto, unido al comprobado fracaso de experiencia políticas confrontacionales, llevó a los liderazgos a privilegiar la cooperación, el diálogo y la negociación por sobre el conflicto y a la ciudadanía a relativizar y/o postergar sus demandas más profundas (otorgar una “*luna de miel*” a la conducción nacional) en un período de gran fragilidad pero que terminaría disipándose con el propio proceso de consolidación de la democracia. Aquí, por lo mismo, concordé con diversos autores que expresan que la baja polarización favorece la gobernabilidad y, por lo mismo, la posibilidad de tener una transición “exitosa”.

Se recalcó que estos aprendizajes produjeron a nivel de los partidos de centro e izquierda (DC, PS, PRSD e incluyendo al PC y a un sector liberal de la derecha) un reanclaje más realista y pragmático de la ideología y de la oferta. Esto facilitó la operacionalización de la política de consenso entre opositores y oficialistas y/o descolgados del régimen militar en el período de transición (graficada, por ejemplo, en las negociaciones de las 54 primeras reformas a la Constitución tras el plebiscito) y la consagración del pluralismo moderado (con competencia centrípeta) o multipartidismo de pocos partidos.

A pesar de la reaparición de una fisonomía política similar a los históricos “tres tercios” en términos de representación política (derecha, Concertación y Partido Comunista y otros) que caracterizó el sistema de partidos en los dos últimos tercios del siglo XX, la tendencia partidaria general tendió a concentrarse mayoritariamente en un arco del centro y darle una flexibilidad al sistema de partidos, lo que puede ser encontrado también en la capacidad de los actores de la derecha, del centro y de la izquierda (en particular en los operadores tecno-demócratas) para acordar condiciones mínimas que debían regir en la transición a la democracia y que al final permiten sortear felizmente el clivaje transicional básico.

En los partidos de la Concertación, este reanclaje de su cultura estratégica se reflejó nítidamente en la superación de las políticas de alianzas tradicionales de los llamados partidos de masas (eje comunista-socialista) y la secularización vivida por el partido de esencia programático de centro, la Democracia Cristiana, lo que unido a la práctica conjunta (fortalecimiento de lazos de amistad y predisposiciones al acuerdo) en la lucha en contra de la dictadura en los sindicatos, centros de alumnos, colegios profesionales, etc., facilitaron una convergencia más permanente del humanismo laico y el humanismo cristiano en el arco iris que representa la coalición concertacionista.

El ejercicio político concertacionistas efectuado a partir de identidades históricas diferentes y de los acuerdos logrados, junto con satisfacer cuestiones básicas para cada una de esas identidades, terminaron maximizando los beneficios colectivos de esos entendimientos en la transición misma, en el ejercicio en distintos poderes del Estado y en políticas públicas próximas a sus aspiraciones programáticas.

Dado el contexto en que se inserta la transición, expuse que esta coalición pluriideológica y multclasista se planteó una estrategia de objetivos básicos de esencia crecientes (graduales), los que fueron desde la derrota del dictador y la reinstitucionalización y normalización democrática pos Pinochet hasta un viraje sistémico con las políticas de profundización democrática institucional, de inclusión (políticas sociales y redistributivas) y de modernización de la gestión estatal (eficiencia, fiscalización y transparencia) en un escenario complejo y conflictivo, caracterizado, por un lado, por las limitaciones que imponía los “*veto players*” (empresarios, militares, partidos de derecha, instituciones conservadoras como la Iglesia Católica) al hacerse escuchar taxativamente y aquellas provenientes de entramados institucionales impuestos por el marco legal y, por el otro, por anhelos ciudadanos masivos que proponían una dificultad progresiva para mantener las “legitimaciones tardías”.

En esta perspectiva, resaltamos el hecho de como los avances democráticos se hicieron sobre la base y límites que impusieron situaciones heredadas y los condicionamientos que implicaban para el devenir de la transición el caso del golpe de Estado de 1973 y los consensos formulados para superarlos (situación similar encontramos en Brasil y Uruguay). Particularmente relevante fueron las distorsiones legislativas que imponía la Constitución de 1980 con su sistema binominal y los parlamentarios designados entre otros problemas, las desconfianzas que prevalecían en las FF.AA., la extrema ideologización de los partidos de derechas y los empresarios, y las condicionantes que imponían otros nichos suprademocráticos como la Iglesia Católica.

Todo estos factores si bien condicionaron los ritmos y profundidades de la transición, también ayudaron momentáneamente a la estabilidad del sistema político y a la unidad de la Concertación con la mantención de la disyuntiva entre el Sí y el No del plebiscito de 1988 y la respuesta de colaboración de sus partidos en tres diferentes escenarios interrelacionados: el electoral, el parlamentario y el ejecutivo.

Esta vocación pragmática en un contexto difícil también colaboró a la generación de una notable capacidad para desarrollar mecanismo decisionales audaces y en verdad inéditos (una suerte de liderazgo conceptual), tanto en la política doméstica como en la arena internacional y que permitieron sortear con éxito coyunturas complejas como los derechos humanos (ejemplo con la Mesa de Diálogo) o laboral (diálogo tripartito). Es decir, hay una persistencia de la vocación innovadora en el conglomerado, tanto conceptual como operacional, para buscar diversas formas de profundizar la democracia en los más variados planos, línea de acción que fue compartida por la pluralidad de actores políticos de esta alianza de centro-izquierda.

También fue un factor coayudante a la mantención de la coalición la gran concentración del poder en Chile, y con la cual tuvieron que lidiar constantemente los gobiernos de la Concertación. Si bien esta realidad tiene una raíz histórica, no hay dudas que fue potenciada por decisiones económicas y políticas impuestas por el gobierno militar en el marco de su revolución neoliberal y el surgimiento de una nueva casta empresarial de derecha en medio de la despotenciación del Estado. La interrelación de grupos económicos tradicionales y otros surgidos durante la dictadura, los partidos políticos de derecha (en particular en la ecuación política y financiamiento) y los medios de comunicación, han constituido una triada de *veto players* (barreras) que han retrasado los cambios democráticos anhelados por la ciudadanía (reformas laborales, derechos del consumidor, ombusman, sistema electoral, respeto al medioambiente, etc.), pero que también han servido para mantener vivo en la cultura nacional la contradicción entre democracia y dictadura (más allá de las envolturas) y los anclajes coalicionales que las representan. Esto facilitó identificaciones y pertenencias entre los que tienen, están cómodos y no quieren cambios (conservadores en esencia) y los que no tienen y/o consideran injusta la actual realidad y quieren cambios representados fundamentalmente en el arco del progresismo, dualidad que se ha llevado al plano político-electoral con facilidad por mucho tiempo favoreciendo a la Concertación.

Constaté también que la narrativa histórica común (imaginario) promovida por las élites a partir de realidades previamente negociada entre ellas (consensos), fue una

ecuación entre un mercado con las distorsiones ideológicas que venían desde el régimen autoritario y poco tocables, y una democracia de representatividad limitada que inhibió consecuentemente la participación.

El modelo de transición implementado por los decisores de la Concertación, el que trastoca inicialmente el sentido del eslogan concertacionista del plebiscito de 1988 de “*La alegría ya viene*”, sin embargo y a la postre, también termina reforzando la esencia de los objetivos perseguidos por una coalición refundacional con los retornos crecientes que trajeron las políticas públicas, el proceso de consolidación democrática (institucionalidad y leyes como la de Libertad de Expresión, de Acceso a la Información Pública o de Antidiscriminación) y la nueva narrativa de una democracia más inclusiva, retornos que al final empoderan una condición más participativa de la gente al pasar de súbditos-consumidores a ciudadanos con la consecuente repolitización de la sociedad en su conjunto, quizás no anclada del todo en el sistema de partidos pero sí en la institucionalidad democrática.

En esta misma dirección, se resaltó que las políticas destinadas a la internacionalización del país (en particular la firma de tratados e instrumentos económicos) impusieron indirectamente nuevos estándares que se relacionan con niveles de desarrollo económico, democrático e institucional de Chile. Con ellos, además de satisfacerse la voracidad económica de los empresarios y del propio del modelo, la Concertación apostó por ir afianzando reformas de segunda generación; es decir un redireccionamiento del modelo a través de un nuevo diseño institucional que propiciará ejes y estándares universalmente reconocidos como positivos: producciones sanas y limpias, salarios dignos y un conjunto de derechos laborales, mayor participación de los trabajadores en la toma de decisiones, respeto de las diversas particularidades nacionales, etc. La valoración de esta narrativa, por parte de la ciudadanía, mantuvo la capacidad competitiva de la Concertación y condicionó positivamente la adhesión partidaria a la misma, a la vez de promocionar el sentido de un cambio progresista.

También analizamos que en los sistemas presidencialistas de gobierno, como lo es el chileno, pueden operar maximizando ciertas ventajas que le son inherentes (la concentración de poder por ejemplo) para asegurar una toma de decisiones efectiva y una ejecución expedita de las políticas (eficacia y eficiencia). La Concertación para optimizar estas ventajas, entre otros y como se expuso, propició la reducción del número de agentes del sistema de partidos que influían la toma de decisiones ante el legislativo (en el caso del propio conglomerado el número de partidos bajó de 17 a 4), subordinó (disciplinó) la

acción de los partidos del conglomerado al Ejecutivo (liderazgo en el Presidente) y fortaleció una “seudo” coordinación con la bancada parlamentaria propia y de la oposición en la perspectiva de optimizar la operacionalización de los proyectos de ley.

Este presidencialismo de plena competencia, por otra parte, favoreció la instauración de un “presidencialismo de coalición”, el que se materializa en Chile durante el proceso de transición a la democracia como proyecto progresista de gobierno en el eje formado por socialistas y demócratacristianos, donde la apuesta, como se expresó, no era tanto abordar reformas inmediatas y drásticas de una sociedad congelada (los clivajes profundos), sino emprender, en forma mesurada y gradual, reformas que algunos llaman de segunda generación en una sociedad que había atravesado por una cirugía neoliberal radical, con consecuencias contradictorias. Con esto se rompe la tendencia de más debilidad (disciplina y estabilidad) en las alianzas en sistemas presidencialistas (y multipartidarios) de las que hablaban Mainwaring y Shugart (2002: 258).

Otro factor que ayudó a la continuidad de la Concertación fue el sistema electoral binominal que obliga a coaligarse para ser competitivos y, por lo mismo, favorece el respaldo a un candidato único en los tres conglomerados, lo cual ciertamente estimuló también en la mayoría de los casos la presentación de listas conjuntas en los procesos electorales parlamentarios (más aún cuando toda la Cámara de Diputados y mitad del Senado se eligen junto al Presidente) y municipal en la perspectiva de optimizar las gratificaciones. En el caso de Chile, particularmente, lo favoreció al tratarse de un sistema binominal “sui generis” que no es mayoritario ni proporcional, y que tiende a sobrerrepresentar a la segunda fuerza política en desmedro de la primera y de las otras fuerzas con menor éxito electoral. Esto unido a una renovada predisposición de la cultura política doméstica para formar coaliciones y alianzas mayoritarias en el sistema de partidos, constituyó una diferencia al compararla con los antecedentes del sistema de partidos chileno tradicional.

Si bien la tendencia a la bipolaridad en la competencia electoral por el poder en Chile facilitó la formación de mayorías parlamentarias en apoyo al Presidente, también expresamos que la Concertación no tuvo suficientes apoyos para superar elevados quorum legislativos u otras limitaciones legadas para realizar algunas transformaciones democráticas de fondo (ejemplo, reemplazar el propio sistema binominal, aprobar el voto de los chilenos en el exterior o introducir reformas distributivas más profundas). Sin embargo, para poder sortear la inamovilidad total que lleva esta situación, la Concertación introdujo la figura del ministro Secretario General de la Presidencia como

mediador en las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo de modo de evitar bloqueos mayores en la provisión de bienes colectivos y perjudicar el funcionamiento (continuidad) del régimen político democrático en general.

Para mantenerse en el poder a la vez de romper con la suerte de “cohabitación” existente que imponía en el sistema binominal, como lo describimos, la Concertación tuvo que negociar con el Junto Podemos Más (PC) para ampliar la representación política en la perspectiva de avanzar en los temas vetados y/o mediatizados, y más particularmente para mantener el poder Ejecutivo durante los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet. Sin duda que esta negociación también facilitó el abandono del PC de su línea insurreccional y asumir una suerte de flexibilización programática-operacional, por ciento facilitada también por el fin de los socialismos reales.

El proceso de elección del candidato concertacionista (casi un ganador de antemano sobre todo en las primeras elecciones tras el plebiscito de 1988) y la negociación global del poder entre sus partidos, no es un proceso menor en la consolidación (y continuidad) de la propia coalición. Como se señaló, aquí destacan tres características básicas, novedosas y positivas, que perdurarían en el tiempo:

Primero, y en concordancia con los aprendizajes y enunciados de la lucha en contra de la dictadura, se estableció un proceso de generación de candidaturas presidenciales de legitimación y progresión democrática (primarias crecientemente abiertas y apoyadas de otros instrumentos como las encuestas). Tal legitimidad encontró este proceso que en pleno gobierno de derecha (2012) se empezó a tramitar la Ley de Primarias, la que termina aprobándose el 2013 con carácter voluntario pero vinculante tras su realización. Esta respuesta al retroceso registrado en las primarias voluntarias de la Concertación del 2010, incluso ha sido valorada como fórmula legítima para dirimir el candidato presidencial en la derecha para las presidenciales del 2013.

En segundo, se establece la receta de equilibrio en el gabinete presidencial entre el mundo laico de la Concertación (PS, PPD y PRSD) y su cara más religiosa (la DC) satisfaciendo las recompensas intrínsecas del juego coalicional. Este principio de los equilibrios se mantiene para el caso de las elecciones parlamentarias y municipal, aunque complejizado bajo una ecuación que contempla los conceptos de fuerza y compensación; es decir gratificación a la mayoría sin perder las regalías para la minoría, con un resultado de equilibrio entre estos dos mundos concertacionistas. Hoy, además, se le

agrega un nuevo ingrediente al discutirse fórmulas de participación ciudadana para reemplazar renuncias a cargos de elección popular.

Por último, se inhiben las diferencias ideológico-valóricas mediante la confección unitaria y amplia de un programa de gobierno que sirviese como hoja de ruta, impidiendo que se diera una contienda abierta, por ejemplo, entre lo que se denomina *security-oriented policy* y *efficiency-oriented policy*. Los presidentes de la Concertación, si bien nunca cumplieron cabalmente los programas que confeccionaron los expertos de los partidos y que discutieron las bases al no haber compromisos vinculantes o por las transacciones que implica gobernar (más aún en una transición pactada con preeminencia de los tecnopolíticos con sus virtudes y defectos), siempre tuvieron estos programas como norte o al menos como “recordatorios morales”.

Este proceso de selección-negociación-programación, unido al hecho de que la Concertación delegó tempranamente en la figura presidencial el liderazgo de la coalición (incluso para resolver disputas internas de los partidos) e impuso la modalidad aprendida desde la Alianza Democrática de tener un líder vocero rotatorio de los partidos, además de lograr un alto nivel de disciplina y de pertenencia, permitió compartir más equilibradamente los costos y beneficios de gobernar haciendo disminuir los incentivos para retirarse (*walk away*) y se evitó el efecto de fraccionamientos y/o pérdida de liderazgos con las negociaciones coalicionales, al menos hasta el final del gobierno de la presidenta Bachelet (aunque las fracturas partidarias posteriores fueron menores).

Este proceso, en todo caso y como lo afirmé en el desarrollo de esta investigación, fue de esencia crecientemente democrática y progresista si miramos los candidatos presidenciales y sus programas de gobierno, demostrando el dinamismo y capacidad de la Concertación para sintonizar con los cambios culturales y del propio desarrollo democrático experimentado en el país. El ejemplo más nítido de esto, es la promoción de la primera mujer a La Moneda (por cierto, también avalada por las encuestas).

Claramente la larga administración del poder y sus resultados positivos fueron otro aliciente para la continuidad de la Concertación. El primer mandato democrático de Patricio Aylwin de 1990, fue asumido con la absoluta consciencia de que se debían recomponer los lazos básicos de la sociedad chilena, la que anhelaba paz, estabilidad y un orden que respetara los derechos básicos de las personas. Eran los inicios de una larga transición con pesadas herencias. La Concertación tuvo que convertirse en gobierno y asumir, en algunos casos de modo dramático, los límites que imponía el corsé institucional imperante en el país. El funcionamiento de la institucionalidad democrática,

además de una importante reforma tributaria y el avance sustantivo en clarificar las identidades de los detenidos desaparecidos durante la dictadura, entre otros, constituyen logros claves de la administración Aylwin para la sanación nacional.

El segundo gobierno del también demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuya votación reflejó la alta adhesión a la coalición y a la democracia en particular, además de refrendar el propio apellido Frei en honor a su padre el presidente Eduardo Frei Montalva, si bien enfrentó temas políticos pendientes y una estructura de alta desigualdad social, lo hizo desde una sociedad que gozaba un tiempo de bonanza económica y bienestar. Esta fue la etapa de las grandes reformas en gestión institucional, infraestructura, educación, justicia y de consolidación del proceso de apertura de Chile al mundo. Este exitoso período tuvo un corte abrupto con la crisis asiática de 1998-1999, aunque la normalidad institucional siguió su curso.

En el capítulo 4, “Normalidad institucional y profundización democrática”, expresé que se pusieron a prueba varios de los clivajes (original, transicional, Estado-Iglesia, de acumulación y de modernidad-ecología-industria), así como una nueva debilitación del partido de centro. En este período empieza a manifestarse un cambio en la narrativa política nacional (y en la cultura estratégica) que, en una conjunción difícil, combina igualdad con modernidad, con efecto en la cohesión de las coaliciones y en las imágenes partidarias, realidad que la Concertación, como coalición, sortea con un éxito relativo al enfrentar dificultades e hipotecas.

En esta sección, entre otros, señalamos que la crisis económica internacional fue la coyuntura y uno de los límites más relevantes que le tocó vivir al presidente Lagos en su tercer intento por llegar a La Moneda. Este líder político de doble militancia (socialista y PPD), tuvo la difícil tarea de enfrentar una campaña en el ciclo más bajo de la economía nacional y, en un principio, con la renuencia de los votos de centro. Su eslogan de campaña reflejaba bien los desafíos que debía enfrentar la Concertación: “*Crecer con igualdad*”.

La gestión del presidente Lagos, en todo caso, fue uno de los capitales más valiosos de la democracia chilena y de la Concertación, al demostrar que no solo era capaz de darle gobernabilidad al país en un clima económico internacional adverso o aprovechar las crisis para avanzar como se demuestra con los casos de corrupción y las posteriores leyes de probidad y transparencia, sino que también de llevar adelante gran parte de la agenda que prometió y que concluye con un país en otro nivel en lo que a estatura política-estratégica se refiere, por cierto sin alcanzar la anhelada igualdad.

De esto último y como lo mencioné, por ejemplo, da cuenta el fortalecimiento al proceso democrático que significaron las reformas a la Constitución, por ejemplo el retiro del sentido “garante” de las Fuerzas Armadas del devenir del país (un tutelaje histórico que se percibe desde la Independencia y avalado explícitamente por la Constitución de 1980); la firma de importantes tratados comerciales y, por sobre todo, poner a Chile en otra categoría a nivel mundial por ejemplo con la realización de la APEC en Chile el 2004; la aprobación de la reforma de salud que da tratamiento gratuito a un importante número de patologías (AUGE); distintas iniciativa para combatir la pobreza, como el Programa Chile Solidario; fomento a la cultura y la educación; continuidad de la modernización del Estado; entre muchos avances y consolidaciones.

Lo mismo explicaría que el presidente Lagos dejara el poder con un 61 por ciento de apoyo de acuerdo a una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) del momento, a la vez de despejar positivamente en el imaginario nacional el fantasma de falta de gobernabilidad que rodeaba a los presidentes de abolengo socialista (Allende en el pasado y Alfonsín y De la Rúa en el caso argentino de comparación más contemporánea).

En este mismo capítulo también analicé el gobierno de la presidenta Bachelet y el transplacement de paradigma que vivía la sociedad chilena. Se describe el cambio hacia un modelo más democrático y progresista en un amplio sentido, y de la instalación en los sentidos y el imaginario público de un “*path único*” representado en “el gobierno ciudadano” pero que no necesariamente contraargumentó de fondo la fractura originaria, lo que termina interpelando al sistema de partidos sin afectar la institucionalidad democrática. Ello, en parte, explicaría la irrupción del derechista y empresario presidente Piñera y su discurso progresista desnaturalizado, así como la baja adhesión a los partidos políticos en general.

Los resultados positivos obtenidos durante la gestión del presidente Lagos, permitieron la candidatura presidencial de Michelle Bachelet y de su programa de ampliación de los derechos ciudadano y profundización de las reformas sociales: protección social desde la cuna a la vejez con los nuevos jardines infantiles, el programa Chile Crece Contigo, la Reforma Previsional, avances en una salud más solidaria con la incorporación de más patología AUGE, etc. No menor fue el estilo de liderazgo cercano, certero y eficaz que impuso la Presidenta.

Al finalizar este gobierno, como lo expliqué, se afianza un anclaje narrativo que se erige como “*path único*”, es decir como camino o tendencia dominante que configura una pauta prevaleciente a la cual los actores deben ajustar sus discursos y estrategias: es

decir, de una cultura progresista que persigue la igualdad que aún no llega en plenitud a pesar de los esfuerzos desplegados y de mayor armonía con el desarrollo (ahí está el No a la construcción de represas hidroeléctricas en Aysén), y que al final encaminan hacia una sociedad de garantías como la llamó el presidente Lagos. Y todo ello avalado por diversos instrumentos jurídicos (leyes, decretos, normativas) en un país institucionalizado y en extremo legalista como el chileno.

Todo esto me permite reafirmar la hipótesis de que la Concertación es una coalición efectiva (exitosa) porque ha sido capaz de darle gobernanza al país a través de decisiones virtuosas que, a su vez, le han permitido ir adaptándose a los cambios sin perder sus virtudes de progresión democrática. También ha sido proactiva en la reducción y/o superación de clivajes básicos y las amenazas que padecen las coaliciones en sistema multipartidarios. Ha promovido mecanismos para fortalecer la adhesión y pertenencia de sus partidarios. Logró navegar adecuadamente en un sistema presidencialista con un sistema electoral controvertido (el binominal), y obtener resultados positivos en el logro y ejercicio del poder (ganar elecciones). En conjunto con la repolitización de la ciudadanía, como coalición programática fue poniendo temas prospectivos en la cultura estratégica y anclándolos como sentidos inevitables (*path único*). Pudo mantener la cohesión coalicional tras perder el poder Ejecutivo en las elecciones del 2009-2010 y entró a repensarse estratégicamente en la perspectiva de profundizar un proyecto de desarrollo más sustentable y democrático y de recuperar el poder Ejecutivo para el cumplimiento de este objetivo paradigmático.

Concluyo recogiendo ampliamente una cita expresada por el presidente Lagos y que refleja muy adecuadamente la valoración y sentido de la Concertación en cuanto a coalición política sólida y exitosa, de cualidad pragmática y programática. Este expresó que (2008: 36):

“Resulta notable que ningún partido adoptó formalmente el acuerdo de continuar en coalición, ningún partido debatió el tema, simplemente con el paso del tiempo y, ante el éxito que estaba teniendo el gobierno, se entendió que era obvio que al término del mismo la coalición debiera seguir gobernando Chile. De esta manera, lo que era una Concertación con un tiempo limitado en el horizonte, para regir los destinos de Chile, se convirtió en una coalición que emprendía tareas mayores”.

Y, precisamente, las tareas mayores a las que se refería el presidente Lagos se relacionan a la creación de condiciones para transformación o superación del modelo. Claramente las políticas implementadas y los retornos que han traído, han favorecido la

organización y movilización de diversos sectores, la desarticulación de actores clásicos y aparición de nuevos actores reordenando más fragmentadamente la ecuación de poder, el retorno de la política en medio de un marco progresista que la ordena, entre otros, hechos todos que marcan hitos sustitutivos inequívocos del modelo heredado de la dictadura.

Por lo mismo, y a pesar de los enclaves autoritario-neoliberales que aún persisten después de 20 años de gobierno de este conglomerado de centro-izquierda y de las limitaciones que han significado en la calidad de la democracia, tras lo descrito creo haber comprobado sistemáticamente mi hipótesis en cuanto a que la Concertación de Partidos por la Democracia es una coalición progresiva y programática exitosa por su longevidad en el poder (legitimidad) y por la eficacia y eficiencia en los resultados de las políticas impulsadas en sus cuatro mandatos presidenciales, principalmente por los retornos democráticos crecientes (resultados) que ellos han traído al escenario político nacional en cuanto al desarrollo y profundización democrática.